

EL PIP ANTE EL PROYECTO YOUNG

Por: Rubén Berrios Martínez, Presidente Partido Independentista Puertorriqueño

Durante casi un siglo los puertorriqueños de todas las ideologías políticas hemos luchado -infructuosamente- para que el Congreso de los Estados Unidos, casi siempre hostil o insensible a nuestras demandas, reconozca nuestros plenos derechos políticos como pueblo. Hoy - en el umbral del siglo 21- es fuente de optimismo el que ese Congreso finalmente comience a reconocer su obligación centenaria de descolonizar a Puerto Rico.

Pero, para que el proyecto H.R. 856, mejor conocido como el proyecto Young, sea un instrumento eficaz y aceptable para solucionar el problema de status de Puerto Rico, deben aclararse ciertos asuntos y cumplirse ciertas condiciones. Esto requerirá cambios importantes en el proyecto.

1. El objetivo esencial y la naturaleza del proyecto deben mantenerse a toda costa. El proyecto enfrenta sin ambigüedades y propone soluciones al problema fundamental de la soberanía al promover que se tome una decisión entre dos rutas: una, bajo la soberanía de los Estados Unidos, que conduciría a la estadidad, y la otra bajo la soberanía puertorriqueña, que lleva o a la independencia o a la libre asociación. De otra parte, el Estado Libre Asociado es considerado como el problema a superarse.

2. Al mismo tiempo que se mantiene el objetivo fundamental del proyecto, debe dársele cabida a los legítimos intereses y exigencias de los diversos participantes en el debate sobre el status.

En este contexto, la independencia y la libre asociación, como modalidades que son de la soberanía puertorriqueña, aunque deben continuar agrupadas bajo el mismo título en la propuesta papeleta plebiscitaria, deben distinguirse claramente la una de la otra. La independencia y la libre asociación son miembros de una

misma familia, pero son primas hermanas, no gemelas idénticas.

Propongo, por lo tanto, que el proyecto se enmiende para definir claramente a la libre asociación y a la independencia como modalidades distintas de la alternativa de “soberanía separada” o “soberanía puertorriqueña”, como debería titularse.

Una vez se haya reformulado la libre asociación conforme a aquellas exigencias de sus defensores que estén acordes con el concepto de la libre asociación, sería innecesario incluir el status quo territorial como opción. El propio Partido Popular Democrático rechaza la opción de un territorio no incorporado sujeto al poder del Congreso bajo la cláusula territorial. Incluir una opción territorial o colonial que nadie defiende sería pervertir el concepto de “inclusividad”.

3. El proyecto debería al menos reflejar el “sentir del Congreso” (sense of Congress) respecto a las importantes decisiones que éste tendría que enfrentar en el caso de una petición de estadidad.

El Congreso no debe dar la impresión de que un mero voto mayoritario en el plebiscito es la única condición para que otorgue la estadidad. Más aún, estoy convencido de que, si el Congreso percibe este proyecto como un compromiso implícito de otorgar la estadidad en el caso de que el electorado puertorriqueño votara mayoritariamente a favor de esa fórmula, el proyecto no llegará nunca a convertirse en ley.

Existen interrogantes cruciales con respecto a la estadidad que este proyecto debe aclarar, aún cuando el Congreso no pueda contestar las mismas de modo tal que obligue a un futuro Congreso.

- ¿Es el “sentir del Congreso” que es imposible la estadidad para Puerto Rico a menos que el inglés llegue a ser el idioma primario o común entre los puertorriqueños?
- ¿Puede la estadidad ser una opción realista mientras el ingreso per capita de Puerto Rico sea la tercera parte del de los Estados Unidos y la mitad del ingreso per capita de su estado más pobre, tomando en cuenta las repercusiones que esa realidad tendría en el tesoro federal?

¿Es concebible la estadidad sin un consenso abrumador a su favor en Puerto Rico?

¿Está dispuesto el Congreso a enfrentarse a un “Quebec” caribeño si una minoría a favor de la soberanía separada llegara a ser mayoría en la próxima generación?

Como mínimo, el Congreso debería clarificar que, si la estadidad obtiene la mayoría suficiente en el plebiscito, pero no se actúa favorablemente respecto a esta petición en un período de tiempo razonablemente corto, la estadidad se considerará rechazada. El proyecto debe proveer que, en esa eventualidad, para lograr el objetivo fundamental de la descolonización, el Pueblo de Puerto Rico deberá entonces escoger entre las restantes opciones: independencia y libre asociación.

4. El proyecto debe ser justo y equitativo respecto a las potenciales consecuencias económicas de las diferentes alternativas.

El Congreso de los Estados Unidos está obligado bajo el derecho internacional a descolonizar a Puerto Rico. Tiene además un compromiso moral y político después de casi cien años de ocupación. En este contexto, el Congreso debe expresar explícitamente su disposición de aprobar una transición justa y razonable hacia la independencia, así como la de crear un fondo de reparación o de desarrollo.

El libre comercio y la cooperación económica no son prerrogativas exclusivas de la estadidad, y son claramente posibles bajo la independencia en esta época de globalización y de tratados económicos regionales.

5. El Congreso debe enfrentar el problema de la ciudadanía bajo la alternativa de la soberanía puertorriqueña. Debe comenzar separando el mito de la realidad.

Estoy firmemente convencido de que el principal valor que la inmensa mayoría de los puertorriqueños adjudica a la ciudadanía americana es el derecho de viajar libremente hacia y desde los Estados Unidos. Debe recordarse que el libre tránsito y el libre

comercio entre Puerto Rico y los Estados Unidos se establecieron desde el 1900 -17 años antes de que los puertorriqueños se convirtieran en ciudadanos americanos.

Como en los casos del libre comercio y la cooperación económica, si el Congreso expresara o implicara que el libre tránsito sólo es posible bajo la estadidad, estaría promoviendo una mayoría artificial pro estadidad que no tendría nada que ver con el espíritu de compromiso patriótico con los Estados Unidos que debería ser la base de un sentimiento serio pro estadidad. La lealtad a la propia nación y la libertad de viajar a otras naciones son, como muy bien saben los americanos, dos asuntos radicalmente diferentes.

En cuanto a los independentistas concierne, aspiramos exclusivamente a nuestra propia ciudadanía puertorriqueña en un Puerto Rico independiente. Pero en cuanto a aquellos puertorriqueños nacidos antes de la independencia que deseen conservar su ciudadanía americana, se les debe permitir hacerlo.

En cuanto a los ciudadanos nacidos después de la independencia, el Congreso debería permitir arreglos para el libre tránsito entre ambos países. La Comunidad Europea es un buen ejemplo de este tipo de arreglo. Más aún, debe recordarse que fueron los Estados Unidos los que, tras la invasión, crearon y promovieron el libre tránsito.

6. El proyecto debe enmendarse para reducir sustancialmente el tiempo que se provee para la completa implementación de las diferentes alternativas, y

7. Para garantizar que todas las opciones tengan adecuado e igual acceso a los fondos públicos para la campaña plebiscitaria.

8. Debe también enmendarse el proyecto para precisar quiénes tendrán derecho a votar en el plebiscito.

Debe ser obvio que, si el plebiscito no es una elección general para seleccionar unos funcionarios, sino una elección especial para adelantar la causa de la libre determinación del pueblo puertorriqueño, sólo los puertorriqueños y no los meramente residentes en Puerto Rico deben tener derecho a votar. Por puertorriqueños entiendo aquellos nacidos en Puerto Rico o de

padres puertorriqueños que residen en Puerto Rico o que, aún residiendo fuera de Puerto Rico, tienen la intención de volver a vivir en Puerto Rico. Como excepción, los no puertorriqueños que han residido en Puerto Rico durante un período sustancial de tiempo y que tienen la intención de permanecer en Puerto Rico, deben tener también el derecho a participar en el plebiscito.

Antes de concluir quiero aclarar para la historia la razón de ser de la participación del Partido Independentista Puertorriqueño en este proceso plebiscitario.

El Partido Independentista Puertorriqueño está convencido de que la integración de Puerto Rico a los Estados Unidos como un estado de la Unión no es una solución válida al problema colonial de Puerto Rico.

Puerto Rico es una nación plenamente constituida, hispano parlante, latinoamericana y caribeña. Argüir que Puerto Rico no es una nación es tan absurdo como argüir que los negros en los Estados Unidos no eran seres humanos antes de la abolición de la esclavitud.

Para una nación como Puerto Rico, la estadidad sería el equivalente no diluir, sino a abdicar de, nuestro derecho a gobernarnos a nosotros mismos como puertorriqueños, no importa cuan intensamente ejerzamos nuestro derecho al voto. El problema de Puerto Rico no es el de la falta de derechos de participación de una minoría étnica en los procesos políticos de la metrópolis, ni un asunto de derechos civiles, como parecen pensar algunos. No es un problema de derechos individuales: es un problema de derechos nacionales -del derecho inalienable de una nación, de un pueblo, a gobernarse a si mismo.

Incluso los estadoistas puertorriqueños postulan nuestro derecho como pueblo a nuestra identidad propia: estadidad jíbara” la llaman. Los puertorriqueños de todas las ideologías políticas orgullosa y enérgicamente proclaman que la lengua y la cultura puertorriqueña no son negociables bajo ningún status.

La lealtad primaria de los puertorriqueños es a Puerto Rico, no a ninguna otra nación. Quebec e Irlanda son sólo dos recordatorios contemporáneos de los peligros que surgen cuando

una nación intenta absorber otras naciones. Las naciones, por definición, no pueden renunciar a su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia . es decir, su derecho a la secesión.

La independencia, por otra parte, es la conquista de todos los poderes necesarios para romper el círculo de impotencia y dependencia endémico en nuestra relación colonial, que sólo se agravaría bajo la estadidad y que impide nuestro desarrollo y mina nuestra dignidad y autoestima. Más aún, la independencia sería el fin de nuestra cada vez mayor dependencia del presupuesto federal y sería fuente de incalculable buena voluntad para la América Latina y el Caribe -condición indispensable para una nueva política de los Estados Unidos hacia la región en el próximo siglo.

Tarde o temprano el gobierno de los Estados Unidos llegará a la conclusión de que la única opción verdadera para nuestros dos países es la independencia. Pero aún no hemos llegado ahí y es necesario que el proceso continúe.

La relación entre el colonizador y el colonizado niega la esencial igualdad entre las naciones de la misma manera que la relación entre amo y esclavo niega la esencial igualdad entre los seres humanos. Por el honor y el respeto tanto de Puerto Rico como de los Estados Unidos, pongámosle fin.

Washington D.C., USA
19 de marzo de 1997